CONGRESO DE LA REPUBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
28 DIC. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 19:00 h.

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el **Proyecto de Ley N° 0200/2021-GL,** Ley que Modifica el Artículo **279-G**, del Código Penal-Fabricación-Comercialización, uso o porte de Armas, Proyecto de Ley presentado por la Municipalidad Distrital de Comas, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 107° de la Constitución Política de Perú.

Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su Undécima Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 2022, acordó por **UNANIMIDAD**, la **NO APROBACIÓN** del presente dictamen.

Con el voto a favor de los congresistas presentes: GONZA CASTILLO Américo, BALCAZAR ZELADA José María, PAREDES GONZALES Alex Antonio, ALEGRIA GARCIA Arturo, ALVA PRIETO María del Carmen, CERRON ROJAS Waldemar José, CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa, CRUZ MAMANI Flavio, ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot, GUERRA GARCÍA Campos Hernando[1], JUÁREZ GALLEGOS Carmen Patricia, MORANTE FIGARI Jorge Alberto, MUÑANTE BARRIOS Alejandro, SOTO PALACIOS Wilson y TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina[2].

I SITUACIÓN PROCESAL

a. Antecedentes procedimentales

El Proyecto de Ley N° 0200/2021-GL fue presentado el 15 de Setiembre de 2021, siendo decretado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 21 de setiembre de 2021, en calidad de única comisión dictaminadora.

b. Antecedentes Parlamentarios:

Efectuado la búsqueda sobre los antecedentes parlamentarios hemos encontrado el Proyecto de Ley 7297/2020-CR, de fecha 09 de Marzo del 2021, propuesto por la

[1] *Voto a favor consignado mediante oficio N° 046-2022-2023-HGGC/CR*
[2] *Voto a favor consignado mediante oficio N° 0063-2022-2023-AJTG/CR*

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022 18:26:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 10:01:18-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 13:42:33-0500

Congresista Zenaida Solís Gutiérrez en representación del Grupo Parlamentario del Partido Morado, decretada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 10 de Marzo del 2021, mediante el cual, se proponía Fortalecer la Seguridad Ciudadana a través de la entrega voluntaria de Armas y Municiones.

c. Opiniones e informaciones solicitadas

Se ha solicitado opinión a las siguientes instituciones:

PROYECTO DE LEY	OFICIO	INSTITUCION	FECHA
0200/2021-GL	Of. P.O. N° 083-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	28/09/2021
	Of. P.O. N° 084-2021-2022-CJYDDHH/CR	MINISTERIO DEL INTERIOR	28/09/2021
	Of. P.O. N° 085-2021-2022-CJYDDHH/CR	MINISTERIO DE DEFENSA	28/09/2021
	Of. P.O. N° 086-2021-2022-CJYDDHH/CR	PODER JUDICIAL	28/09/2021
	Of. P.O. N° 87-2021-2022-CJYDDHH/CR-	MINISTERIO PÚBLICO	28/12/2021
	Of. P.O. N° 88-2021-2022-CJYDDHH/CR	DEFENSOR DEL PUEBLO	28/12/2021
	Of. P.O. N° 89-2021-2022-CJYDDHH/CR	INPE	28/12/2021
	Of. P.O. N° 90-2021-2022-CJYDDHH/CR	SUCAMEC	28/12/2021
	Of. P.O. N° 569-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	02/02/2022
	Of. P.O. N° 570-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	MINISTERIO DE DEFENSA	02/02/2022
	Of. P.O. N° 571-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2022
	Of. P.O. N° 572-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	DEFENSOR DEL PUEBLO	02/02/2022
	Of. P.O. N° 573-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	INPE	02/02/2022

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

	Of. P.O. N° 573-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	SUCAMEC	02/02/2022

II.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTA

El Proyecto de Ley N° 0200/2021-GL, tiene por objeto modificar el artículo 279-G, del Código Penal – Fabricación, Comercialización, Uso o Porte de Armas.

El proyecto de Ley, materia de análisis propone modificar el Artículo 279-G, quedando redactado de la siguiente manera:

*"El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de **doce años**, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.*

*Será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hacen referencia en el primer párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de **catorce años** cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.*

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años cuando se presta, alquila o facilita las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer parrado a menores de edad.

En cualquier supuesto, si el agente es miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o Instituto Nacional Penitenciario la pena será no menor de diez ni mayor de quince años.

El que trafica armas de fuego artesanales o materiales destinados para su fabricación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.

Para todos los supuestos se impondrá la inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal, y adicionalmente el inciso 8) si es miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa".

Asimismo, en la exposición de motivos, el Proyecto de Ley, hace un análisis de la consecuencia de la Ley como mecanismo persuasivo de prevenir, disuadir y sancionar la comisión del delito mencionando

Finalmente, el proyecto es una iniciativa merituada con base al ejercicio del derecho de iniciativa en la formación de leyes que confiere el artículo 107de la Constitución Política del Perú, cuyo contenido se encuentra vinculado al tema de Justicia, por lo que su estudio y dictamen corresponde en efecto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

III.- MARCO NORMATIVO

III.1. Legislación Nacional

- Constitución Política del Perú de 1993, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de diciembre de 1993.
- Decreto legislativo 635 que aprueba el Código Penal.
- Artículo 279-G del Código Penal.
- Reglamento del Congreso de la República.
- Decreto Legislativo N' 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
- Resolución Ministerial N·1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
- Decreto Legislativo N·1267, Ley de la Policía Nacional del Perú y sus Modificatorias.
- Decreto Supremo N·026-2017-IN, Reglamento del Decreto Legislativo N·1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
- Ley N·30299, Ley de Armas de Fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.
- Ley N·26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N·008=2006-JUS.

III.2. Legislación comparada

El Ministerio de Defensa de Chile, a través de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), controla las armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, sin perjuicio de las funciones que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2.1. ¿Qué tipo de armas están sometidas a control?

El material de uso bélico (armas, municiones, explosivos o elementos similares, construidos para ser utilizados en la guerra por las Fuerzas Armadas; junto con los medios de combate terrestre, naval y aéreo).

-Las armas de fuego, cualquiera sea su calibre y sus partes, dispositivos y piezas.

Las municiones y cartuchos.

-Los explosivos de uso industrial, minero u otro uso legítimo, que requieran autorización, así como sus partes y piezas, incluyendo detonadores.

-Las sustancias químicas, que pueden ser usadas para la fabricación de

explosivos o para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos, y elementos lacrimógenos.

-Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares, junto con sus partes, dispositivos y piezas.

-Las armas basadas en pulsaciones eléctricas, tales como los bastones eléctricos,

o de electroshock, y otras similares.

-Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, reparación, práctica o deporte, almacenamiento o depósito de estos elementos.

2.2. ¿Qué armas o artefactos bélicos están prohibidos?

Ninguna persona podrá poseer o tener alguna de las siguientes armas, artefactos o municiones:

A. Armas largas cuyos cañones hayan sido recortados.
B. Armas cortas de cualquier calibre, que funcionen en forma totalmente automática.
C. Armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva.
D. Armas de juguete, fogueo, balines, postones o aire comprimido, adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos.
E. Armas artesanales o hechizas, artefactos o dispositivos, cualquiera sea su forma de fabricación, partes o apariencia, que no sean artefactos bélicos o armas de fuego, y que hayan sido creadas, adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos.
F. Armas cuyos números de serie o sistemas de individualización se encuentren adulterados, borrados o carezcan de ellos.

G. Ametralladoras y subametralladoras, metralletas o cualquiera otra arma automática o semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería.
H. Silenciadores.
I. Municiones perforantes, explosivas, incendiarias, adaptadas, de alto calibre y todas aquellas que por su naturaleza no correspondan al uso civil, lo que será determinado por la DGMN.
J. Dispositivos que permitan modificar los sistemas de disparo de las armas, de semiautomática a automática.
K. Armas transformadas respecto de su condición original, a menos que la DGMN lo autorice para fines exclusivamente deportivos y siempre que no implique una transformación estructural del arma.
L. Nadie podrá tener o portar artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos; de sustancias corrosivas o de metales, que por la expansión de los gases producen esquirlas, bombas o artefactos explosivos o incendiarios; ni los implementos específicamente adaptados para el lanzamiento o activación de cualquiera de estos elementos (salvo las autorizaciones para FF.AA., policías y Dirección General de Aeronáutica Civil).
M. Ninguna persona podrá poseer o tener armas nucleares.

III.3. Normas convencionales

Nuesto país, tiene suscritas en las instancias supranacionles convenios y tratados, siendo estos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, menos los que estan incursos en el tipo penal que se pretende incorporar el aumento de pena, porque se contrapone a la resocialización del penado.

Asimismo todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

IV.- ANALISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

4.1. ANALISIS TÉCNICO

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

El Proyecto de Ley 0200/2021-GL, propone el incremento de pena para el tipo penal que se encuentran en el artículo 279-G del código penal, tanto en la tipificación simple como en la agravada. Actualmente, se necesita de mucho trabajo en el campo de la lucha contra la tenencia ilegal de armas porque es parte del suministro ilegal para comisión de delitos como los asaltos en las calles, arrebatos, asesinatos, sicariato, etc., con el uso de armas de fuego, muchas de procedencia ilegal.

A diario observamos y escuchamos en los medios de comunicación a cerca del incremento del uso de armas de fuego para delinquir.

El Estudio mundial sobre el Tráfico de Armas (2020) elaborado por la Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias, División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[3] señala que las pistolas son el tipo de arma de fuego más incautada a escala mundial. Sin embargo, esta tendencia se ve impulsada en gran medida por América, la región que reportó el mayor número de armas de fuego incautadas en general a través del cuestionario. Las pistolas constituyeron más del 50% del total de las armas de fuego incautadas en dicha región durante el período abarcado en el estudio.

Según el mismo estudio las pistolas son el tipo de arma de fuego más incautada a escala mundial. Sin embargo, esta tendencia se ve impulsada en gran medida por América, la región que reportó el mayor número de armas de fuego incautadas (...) Las pistolas constituyeron más del 50% del total de las armas de fuego incautadas en dicha región durante el período abarcado en el estudio.

En el caso peruano, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dan cuenta de una problemática cuya atención merece ser priorizada, considerando el aumento en el porcentaje de victimización con armas de fuego que ha sido **registrado al cierre de 2018 y octubre de 2019.**

A nivel nacional, este indicador aumentó del 9,1% al 10,9%, y en Lima Metropolitana del 13,6% al 15%. El crimen se está volviendo más letal y ello impacta en los niveles de percepción de inseguridad, que a nivel nacional mantienen un registro histórico superior al 85%.

En Perú, según estudios de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), más del 60% de armas incautadas a la delincuencia podría tener origen legal y 25% de hecho lo tiene, siendo que de este último porcentaje sólo un 15% reportó el robo o pérdida del arma.[4]

En el Perú, como en el resto de América Latina, buena parte del debate público acerca de cómo enfrentar el aumento de la tasa de la tenencia ilegal de armas de fuego gira en torno de cómo hacer más eficaz y más severa la pena de los hechos delictivos.

[3] (https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/Global_Study_Ex_Summary_es. pdf)
[4] https://ojo-publico.com/1573/ni-mas-armas-ni-mas-crimenes

4.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Lo propuesta legislativa no alterará el marco constitucional ni la legislación vigente, sin embargo, lo que se prosigue con esta iniciativa legislativa es modificar el artículo 279-G del Código Penal, incrementando la pena por el delito de tenencia ilegal de armas.

4.3. ANALISIS SOBRE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA.

El Proyecto de Ley N° 0200/2021-GL, tiene por objeto modificar el artículo 279-G, del Código Penal, que sanciona la Fabricación, Comercialización, Uso y Porte de Armas.

La iniciativa legislativa busca endurecer la pena e incrementarla la misma que se encuentra tipificada en nuestro Código Penal en el Artículo 279-G, y escuchando comentarios de autoridades, funcionarios y líderes sociales, políticos, religiosos y medios de comunicación, anunciar que se debe aumentar las penas de los autores de estos delitos que motivan el presente proyecto de Ley.

4.4. ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

La legislación nacional en el Decreto Legislativo 635 aprueba el Código Penal, y su modificatoria, mediante Decreto Legislativo N° 1181.

La propuesta legislativa N·0200/2021-G.L "endurece la pena" en su acepción más simple y evita que el magistrado pueda aplicar de manera gradual, atendiendo la participación del infractor en la comisión del delito, lo que implica la sobre criminalización e incremento punitivo de delitos que a la postre no resulta ser una respuesta adecuada frente al aumento de la criminalidad.

Como Estado estamos obligados de atender al ser humano como tal y no como una cosa o animal, sino que, siendo un ser eminentemente social, es deber imperativo resocializar al infractor.

El rol del Estado es justamente lograr que la sociedad fomente una cultura de paz, para ello debe implementar una serie de políticas de Estado multisectorial que permita una nueva sociedad, trabajando de manera preventiva y no reactiva.

Por lo significativo de la propuesta y siendo que las demás opiniones institucionales de diversas entidades del sector público, consideramos que la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de Ley N.° 0200/2021-GL **resulta no viable.**

V OPINIONES RECIBIDAS

El Proyecto de Ley N° 0200/2021-GL, ha recibido las siguientes opiniones:

5.1.- PODER JUDICIAL

Mediante Oficio N° 003451-2022-SG-CS-PJ de fecha 20 de Octubre del 2021, el señor WILLIAN CARLOS PEÑALOZA MATIAS, Secretario General de Corte Suprema de Justicia de la República, hace llegar el informe N°000156-2021-GA-P-PJ, dando opinión al Proyecto de Ley 0200/2021-GL, en los siguientes términos:

5.1.1. ANÁLISIS

5.1.1.1 Dentro de los controles sociales formales, se tiene, por preminencia, al derecho penal que ejercen los Estados bajo su *ius puniendi*[5] como la mayor fuerza jurídica para exigir a los ciudadanos el acatamiento de las conductas que se esperan en una sociedad democrática. Sin embargo, esta atribución del Estado no se encuentra reservada para un solo ente representativo del Estado, pues aquella puede ser ejercida tanto por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los distintos ámbitos de sus atribuciones y cuando resulte necesario.

5.1.1.2 Así, dentro del ejercicio del ius puniendi, el Congreso de la República tiene a bien delimitar y establecer las conductas que considera relevantes para ser reprimidas con medidas que las restrinjan y sean aplicadas por los operadores de justicia.[6] Empero, tampoco se debe recurrir a una sobrecriminalización[7] de conductas que conlleven a establecer una normativa sustantiva (Código Penal), que resulte inaplicable o reiterativa, cuya efectividad se haría irrelevante o generaría problemas de interpretación, así como de subsunción.

5.1.2. ACERCA DE LA SOBRECRIMINALIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA POLÍTICA CRIMINAL

---

[5] La función punitiva del Estado social y democrático de derecho se origina en su soberanía para identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente. [Jescheck, H., Weigend, T. (2002). Tratado de derecho penal. Parle general. (5ª edición, pp. 11-12). Editorial Comares.]

[6] En uso de las facultades que le otorga el literal c) del artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República.

[7] Si bien, lo ideal es la progresiva sustitución de las penas privativas de libertad por otras menos gravosas o por sustitutos como la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio; sin embargo, en la actualidad, se observa una tendencia no precisamente a la despenalización, sino a la sobrecriminalización, por ejemplo, con el aumento de los mínimos legales de la pena de privación de la libertad o la introducción de nuevos injustos penales. [Villavicencio, F. (2019). Derecho Penal-Parle General. (p. 109). Grijley.]

5.1.2.1. En primer lugar, se debe señalar que, en el Perú, como consecuencia de la creciente inseguridad ciudadana, la criminalización primaria se ha manifestado en una tendencia a la sobrecriminalización en la legislación penal.[8] Al respecto, no debemos olvidar que la criminología, la política criminal y la dogmática penal son autónomas en cuanto a campos científicos, los mismos que se encuentran más ligados a una unidad funcional en el complejo del procedimiento de realización del derecho penal.

5.1.2.2. En este proceso decisivo, la criminología aporta el conocimiento empírico sobre el surgimiento de la criminalidad y la lucha contra ella. Asimismo, la política criminal busca transformar la experiencia criminológica en opiniones y estrategias concretas, asumibles por el legislador y los poderes públicos. Además, la dogmática penal presenta las posibilidades de configuración del derecho para fines políticos criminales. Una vez que la decisión ha obtenido vigencia jurídica por obra del legislador, la sistematización y la interpretación son tarea de la dogmática penal.[9]

5.1.2.3. De este modo, la política criminal se ocupa, en primer término, de efectuar el estudio crítico y prospectivo de las normas penales y de las institucionales que se encargan de la oportuna y eficaz aplicación preventiva y represiva. Para ello, promueve las reformas legislativas adecuadas a las nuevas situaciones sociales; es decir, examina si corresponde o no tales mecanismos a las exigencias de la sociedad y propone las reformas correspondientes. Así, surge un derecho penal dinámico, que va remozando de acuerdo con los avances de la ciencia. También, otorga a los poderes públicos las programaciones científicas concretas, que elabora en la lucha contra la delincuencia, más adecuadas para el eficaz control del delito.[10]

5.1.2.4. Así, podemos establecer que una respuesta a la criminalidad no parte necesariamente de una sobrecriminalización de conductas o con el aumento de las penas, sino que esta, ineludiblemente, merece un estudio más detallado y fundamentado por parte de todos los actores que intervienen antes, durante y después de la elaboración de una norma específica.

5.1.3. SOBRE LA FINALIDAD DE LA PENA

5.1.3.1.Una explicación crítica de la pena parte de considerar a esta como un mal, y plantea la negación de su fundamento y la utilidad de la pena. Otras explicaciones parten de la misma premisa, pero admiten la posibilidad de comprobar cierta eficacia de la pena. Ello, dependiendo de si en la realidad, respecto del ejercicio del poder penal, es posible demostrar la eficacia de los fines preventivos de la pena (prevención general y especial); entonces, podrá ser

[8] Villavicencio, F. (2019). Derecho Penal-Parle General. (p. 23). Grijley.
[9] Op. Cit., p. 25.
[10] Op. cit., p. 28.

posible aceptar o negar políticamente la legitimidad de la pena.[11]

5.1.3.2. El Código Penal de 1991 introdujo a la legislación penal peruana normas sobre la finalidad de la pena y un nuevo sistema de penas. En este sentido, el artículo 1 del título preliminar declara que "este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad", y el artículo IX del título preliminar expresa que "la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora". Por ello, podemos considerar que el Código se inscribe en la línea de una teoría unitaria aditiva de la pena y como función de esta.[12]

5.1.3.3. De modo tal que la pena tiene una mezcla de proporcionalidad (como respuesta inmediata frente al delito): prevención general (reinstaurando la norma vulnerada y demostrando su importancia frente a la sociedad) y prevención especial; en tal sentido, se considera dar mayor énfasis en esta última variante por la necesidad de rehabilitación del penado, a fin de reincorporarlos a la sociedad.

5.1.4. LÍMITES DE LA PENA

5.1.4.1. Ahora bien, se aprecia que los límites del poder penal actúan tanto en la creación de las normas penales (criminalización primaria) como en su aplicación (criminalización secundaria), pero se les suele clasificar en límites materiales o garantías penales y límites formales o garantías procesales, de persecución, de ejecución. Así, dentro de los límites materiales o garantías penales, debemos destacar para el presente caso lo siguiente:

- Principio de respuesta no contingente: refiere a que la ley penal es una respuesta a conflictos sociales. El procedimiento para determinar los límites de la respuesta estatal debe exigir un cuidado debate parlamentario, análisis a través de instituciones representativas y una adecuada discusión pública, de forma tal que se ejercite una contención a la llamada administrativización del derecho penal, entendida como la proliferación incontrolada y no planificada de normas penales. La ley penal no puede ser una respuesta inmediata frente a todo tipo de conflicto social; sin embargo, esta práctica es usual en la respuesta que el Estado peruano suele realizar ante el aumento de la criminalidad.[13]

5.1.4.2. Por ello, resulta importante generar correctos ámbitos de discusión, para que, sobre las bases de la investigación obtenida a través del análisis desde la óptica de la política criminal, se pueda establecer la pertinencia o no de la medida propuesta por el proyecto de ley analizado.

---

[11] óp. cit., p. 69.
[12] Op. Cit., p. 72.
[13] Óp. Cit., p. 121

5.1.4.3. Igualmente, se debe tomar en cuenta lo señalado, a continuación, por los fundamentos jurídicos 15 y 16 de la Sentencia Plenaria Casatoria N. ° 01-20018/CIJ-433, del 18 de diciembre de 2018:

15.° [...] La pena, pues, debe responder conjuntamente a la gravedad del injusto cometido (responsabilidad por el propio hecho) y a las necesidades sociales de pena que pueda existir al momento de su imposición y durante su ejecución; y, al confirmar los valores de convivencia que dan lugar a la norma de conducta infringida, expresa un reproche de contenido ético-social [.. .].

16.° Entonces, metodológicamente, como se precisó, por ejemplo, en la STCE 136/1999, de veinte de julio, cabría examinar la proporcionalidad de una reacción penal desde tres perspectivas:

5.1.4.3.1. Desde su idoneidad, el tipo penal ha de procurar la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución.

5.1.4.3.2. Desde su necesidad, la pena ha de permitir alcanzar fines de protección - una pena será innecesaria, entonces, cuando a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador.

5.1.4.3.3. Desde su estricta proporcionalidad, la norma debe guardar equilibrio entre la entidad del delito y la entidad de la pena; no lo será, desde luego, cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa.

5.1.5. ANÁLISIS DE LA NORMA EN CUESTIÓN

5.1.5.1. Se debe señalar que, tras la dación del Código Penal, del 8 de abril de 1991, a través del Decreto Legislativo N.° 635, se estableció, en su artículo 279 original, lo siguiente: "El que, ilegítimamente, [...] tiene en su poder [...] armas, municiones [...]". Lo citado fue sancionado con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.

5.1.5.2.Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo N.° 898, del 27 de mayo de 1998, se incrementó el marco punitivo de dicho artículo a una sanción no menor de seis ni mayor de quince años de privación de la libertad. Con las posteriores modificaciones legislativas (mediante la Ley N.° 30076,

del 19 de agosto de 2013; la Ley N.° 30299, del 22 de enero de 2015; y el Decreto Legislativo N.° 1237, del 26 de septiembre de 2015), se mantuvo dicha fórmula típica al igual que la sanción penal consecuente.

5.1.5.3. Sin embargo, con la dación del Decreto Legislativo N.° 1244, del 29 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo emitió una serie de medidas sustantivas y procesales, en aras de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. En mérito de ello, decidió modificar la formula clásica del artículo 279 para no incluir la tenencia de armas en su fórmula típica, sino de artefactos de distinta naturaleza lesiva; por otro lado y en su reemplazo, incorporó el artículo 279-G, con el que creó la figura específica de la fabricación, comercialización y uso o porte de armas. En ese sentido, sancionó la posesión y alquiler de armas con la privación de libertad no menor de seis ni mayor de diez años (según el primer párrafo), no menor de ocho ni mayor de doce años cuando las armas sean de propiedad del Estado (segundo párrafo), no menor de diez ni mayor de quince si el agente es miembro de la PNP o las Fuerzas Armadas (tercer párrafo), no menor de seis ni mayor de quince al tráfico de armas artesanales (cuarto párrafo) e inhabilitación correspondiente (quinto y último párrafo).

5.1.5.4.Esta fórmula legislativa y sus consecuencias penales se han mantenido hasta la actualidad sin haber sido modificadas.

5.1.5.5 De otro lado, la exposición de motivos de la comuna edil justifica el incremento de las penas para el artículo 279-G, en mérito al incremento de la estadística criminal y su aumento en el porcentaje de victimización con armas de fuego de los años 2018 y 2019. Con ello, busca consolidar políticas orientadas a prevenir y disuadir dicha conducta, proporcionar una cultura cívica de respeto a la ley, poner especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas, garantizar su presencia en zonas vulnerables y fomentar una cultura de paz.

5.1.5.6. De forma directa, podemos apreciar que la exposición de motivos no brinda una justificación de por qué el incremento de la pena propuesta cumplirá con las finalidades que pretende, debido a lo siguiente:

5.1.5.7. No se contrarrestó estadística que indique cómo el incremento de pena del tipo original del artículo 279 permitió el descenso de la criminalidad de dicha conducta; pues, por el contrario, la misma se incrementó como la propia exposición de motivos señala.

5.1.5.8. No se tomó en cuenta ni se analizó cada conducta típica contenida en los distintos párrafos del artículo 279-G para disgregar la necesidad del incremento de penas en cada caso.

5.1.5.9. No se realizó un análisis de la pena sobre la base del pnnclpl0 de

proporcionalidad que justifique por qué el incremento de pena propuesto cumplirá con la finalidad que se pretende.

5.1.5.10. La finalidad que pretende el proyecto se orienta a objetivos que escapan a la del derecho penal como control social formal y de aplicación de última ratio; y más bien, obedecen a otras formas de control social (informal o formales) que deben ser analizadas separadamente.

5.1.5.11. No se explicó por qué el incremento de pena únicamente se aplicará a los dos primeros párrafos y no a todos los que contiene el artículo 279-G.

5.1.5.12. En cuanto a la propuesta de incorporación de un párrafo adicional para contemplar la sanción cuando la conducta involucre a un menor de edad, se debe apreciar que el representante edil no tomó en cuenta que el artículo 46-D del Código Penal ya contempla una circunstancia de agravación específica (que conlleva al incremento de la pena) cuando se involucran menores de edad en la comisión de delitos, lo que conlleva a que la modificación propuesta resulte innecesaria.

5.1.5.13. En tal sentido, no se aprecia una justificación directa o indirecta que justifique la propuesta legislativa; por lo tanto, la misma debe ser rechazada.

5.1.6 CONCLUSIONES

Por lo tanto, consideramos que la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de Ley N.° 200/2021-GL **resulta no viable**, debido a lo siguiente:

5.1.6.1. No existe fundamentación básica o suficiente que justifique el incremento de pena solicitada o la creación de una agravante que ya se encuentra señalada en el Código Penal.

5.1.6.2. Las finalidades que busca el proyecto de ley escapan de las funciones del derecho penal como medio de control social formal y de última ratio.

5.1.6.3. No resulta correcta la sobrecriminalización o el aumento de penas como mecanismo de respuesta social automática para frenar la criminalidad, pues ello no solo ha probado ser contraproducente, sino que no se toma en cuenta la finalidad que cumple la pena en nuestro ordenamiento jurídico.

5.2. MINISTERIO DEL INTERIOR

Mediante el oficio N° 00009-2022/IN/DM de fecha 11 de Enero del 2022, el señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui, Ministro del Interior, que remite copia del Informe Técnico N° 001819-2021/IN/OGAJ de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del

Ministerio del Interior, que opina en los siguientes términos:

5.2.1. SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 200/2021-GL

5.2.1.1. El Proyecto de Ley N° 200/2021-GL constituye una iniciativa legislativa del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Comas, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa señalado en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el Acuerdo de Concejo N° 028-2021/MDC de fecha 31 de agosto de 2021, el cual tiene por finalidad modificar el artículo 279-G del Código Penal, con el siguiente texto:

> "El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor **de doce años**, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.
> Será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hacen referencia en el primer párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor **de catorce años** cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.
>
> **La pena privativa de libertar será no menor de ocho ni mayor de catorce años cuando se presta, alquila o facilita las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer párrafo a menores de edad.**
> En cualquier supuesto, si el agente es miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o Instituto Nacional Penitenciario la pena será no menor de diez ni mayor de quince años.
>
> El que trafica armas de fuego artesanales o materiales destinados para su fabricación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.
>
> Para todos los supuestos se impondrá la inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal, y adicionalmente el inciso 8) si es miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa". (Se resalta las modificaciones e inclusiones propuestas)."

5.2.1.2. En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se sustenta lo siguiente:
"(...)

> En Perú, según estudios de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil

(SUCAMEC), más del 60% de armas incautadas a la delincuencia podría tener origen legal y 25% de hecho lo tiene, siendo que de este último porcentaje sólo un 15% reportó el robo o pérdida del arma.

(...)

II. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL La propuesta legislativa no alterará el marco constitucional ni la legislación vigente, sin embargo, lo que se prosigue con esta iniciativa legislativa es modificar el artículo 279-G del Código Penal, incrementando la pena por el delito de tenencia ilegal de armas.

III ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El proyecto de ley propuesto no irroga gasto al erario nacional, pues no existe inversión que se tenga que hacer que genere gastos al fisco, pues es aplicable a las relaciones de derecho público y privado lo que permite que exista una regulación frente a la necesidad de promover y garantizar el cumplimiento de las normas del Código Penal.

IV. VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente proposición legislativa es concordante con la Política de Estado N° 07 establecida en el Acuerdo Nacional, entre sus objetivos tenemos:

(a) Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada;

(b) Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos;

(c) Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres;

(g) Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia;

(e) Fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la reconciliación;"

5.2.1.3. OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDEN PÚBLICO

5.2.1.3.1 Mediante el Memorando N° 000335-2021/IN/VOI, el Despacho Viceministerial de Orden Interno pone a conocimiento el Informe N° 000103-2021/IN/DGCO/DCO/HAF emitido por la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado, por el cual señala:

"(...)

III. CONCLUSIONES:

A. *El Proyecto de Ley 200//2021-GL., presentado por el Alcalde de la Municipalidad*

Distrital de Comas, al Congreso de la República, que propone modificar el artículo 279-G del Código Penalpara sancionar la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, presenta modificaciones e inclusiones diferentes que no están comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1244, que modifica los artículos 279, y 317 del Código Penal; incorpora los artículos 279-G y 317 – B al Código Pena; y modifica los artículos 3° y 24° de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.

B. *El proyecto citado, incrementa la pena privativa de libertad de doce a catorce años cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado; e incluye el párrafo respecto de la pena privativa de la libertad que será no menor de ocho ni mayor de catorce añoscuando se presta, alquila o facilita las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer párrafo a menores de edad, inclusión que el suscrito considera pertinente en la medida que permita disminuir la participación de menores de edad, y que esté acompañada de otras acciones de inteligencia, aplicación de técnicas especiales de investigación, entre otras."*

5.2.1.4. OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

5.2.1.4.1. Por su parte, con Memorando N° 000544-2021/IN/VSP, el Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, traslada el Informe N° 000702-2021/IN/VSP/DGSD/DDF emitido por la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática, por el cual señala:

"(...)

2.7. *Asimismo, el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención." Cabe recordar que, los preceptos señalados y desarrollados en dicho instrumento normativo de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano tienen la jerarquía de norma constitucional al tratarse de un tratado de derechos humanos.*

2.8. *La propuesta de modificación del artículo 279-G del Código Penal, referida al incremento dela pena privativa de libertad cuando sean menores de edad quienes se vean afectados y cuyos derechos sean vulnerados, y se ponga en peligro a la sociedad en general, se enmarcaen esta obligación internacional de proteger y garantizar el interés superior del niño, en sintonía con la extensión de la represión penal de las personas que contribuyan a la tenenciailegal o irregular de armas.*

2.9. *De ahí que, la intensificación de las medidas y políticas de control y represión del uso y tenencia ilegal de armas de fuego es necesaria y urgente, frente a un contexto convulsionadoy proliferación de delitos contra el patrimonio, lesiones, homicidios, asesinatos, violencia de género, violencia intrafamiliar entre otros, los cuales en muchas circunstancias tienen como víctimas y victimarios a personas*

menores de edad, quienes gozan de especial protección e interés de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

5.2.1.5. CONCLUSIONES

5.2.1.5.1. *El proyecto de Ley N° 200/2021-GL, que propone modificar el artículo 279- G del Código Penal para sancionar la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, resulta relevante en tanto que responde a la obligación internacional de implementar medidas para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niños.*

5.2.1.5.2.*La propuesta legislativa además de garantizar una mejor protección a los derechos y cumplimiento de obligaciones del Estado respecto a menores de edad, supone una medida en pos de erradicar el incremento de la criminalidad y uso y tenencia de armas para la comisión de hechos delictivos, que no solo ponen en peligro a las personas directamente involucradas, sino a la sociedad en general.*

5.2.1.5.3.*Por las consideraciones expuestas, la fórmula legal empleada en el Proyecto de Ley Nº 200/2021-GL, que propone modificar el artículo 279-G del Código Penal para sancionar la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, resulta viable."*

5.3. OPINIÓN DE SUCAMEC

Con oficio N· 000009-**2022/IN/DM del Ministerio del Interior que incluye la opinión de SUCAMEC** a través del OFICIO N° 690-2021-SUCAMEC-GG, SUCAMEC pone a conocimiento el Informe Técnico N° 01072-2021-SUCAMEC-GAMAC emitido por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos; y el Informe Legal N° 00709-2021-SUCAMEC-OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, donde precisan lo siguiente:

5.3.1. DEL INFORME TÉCNICO N° 01072-2021-SUCAMEC-GAMAC

"(...)

5.3.1.1. *Al respecto, se advierte que el referido proyecto plantea la modificación del periodo en que el sujeto pasivo del tipo penal quedaría privado de su libertad; en tal sentido, no corresponde que esta Gerencia emita un pronunciamiento técnico sobre dichas modificaciones pues no existe vinculación con su competencia y la de esta Superintendencia, pues en sentido estricto, la administración pública está conminada al cumplimiento irrestricto de las normas legales y reglamentarias vinculadas al uso y porte de armas de fuego; por lo que, no existe injerencia sobre dicha modificación.*

5.3.1.2.*Dicho ello, es necesario considerar que la SUCAMEC es un organismo técnico*

especializado cuya competencia se encuentra determinada en su ley de creación y demás instrumentos normativos que limitan su actuación con respecto a los administrados; en tal sentido, la modificación de los tipos penales tendrá injerencia directa con el Ministerio Público y el Poder judicial, entidades administrativas que de acuerdo con su competencia aplicarán los tipos penales de acuerdo con el principio de tipicidad.

5.3.1.3.Sin perjuicio de lo mencionado, la modificación del artículo 279-G del Código Penal, representa la materialización de la tipificación de un delito penal como resultado de nuevas conductas delictivas que no están sujetas a una sanción penal por no estar prohibido y sancionadopor una norma legal; pues para efectos que sea sancionable se exige que una determinada acción describa una conducta prohibida, antijurídica y atribuible a una persona en concreto; es así que elreferido proyecto de Ley, propone que sea punible el hecho de prestar, alquilar o facilitar las armas o bienes a los que se hace referencia en el primera párrafo (del artículo 279-G) a menores de edad; sea sancionado penalmente. (...)"

5.3.2. DEL INFORME LEGAL N° 00709-2021-SUCAMEC-OGAJ

"(...)

5.3.2.1. *Como puede advertirse, el proyecto normativo tiene por finalidad el incrementar la sanción penal de las conductas tipificadas en los dos primeros párrafos del artículo 279-G del Código Penal, así como incorporar un párrafo orientado a incrementar la sanción penal en caso el sujeto activo del delito preste, alquile o facilite armas o bienes señalados en el primer párrafo del acotado artículo a menores de edad.*

5.3.2.2. *Al respecto, como se ha señalado precedentemente, las competencias de la SUCAMEC son el control, administración, supervisión, fiscalización, regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de armas de fuego, municiones y artículos conexos con la finalidad de preservar la seguridad nacional, la protección del orden interno, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica; no obstante a ello, el acotado proyecto normativo no busca suprimir, incorporar o modificar las conductas típicas establecidas en el artículo 279-G, sino el incrementarla sanción penal a sus conductas tipificadas, las cuales no tienen incidencia con las funciones sustantivas de la SUCAMEC, toda vez que la entidad continuará ejerciendo adecuadamente sus funciones de control y supervisión sobre dichas actividades. (...)"*

5.3.3. OPINIÓN LEGAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

5.3.3.1. El Proyecto de Ley N° 200/2021-GL constituye una iniciativa legislativa del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Comas, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa señalado en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú que facultaa los Gobiernos Locales.

5.3.3.2. El pedido de opinión sobre la iniciativa legislativa solicitada por la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se

enmarcaen el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República que faculta a los Congresistas a formular pedidos de informes para el desarrollo de sus funciones.

5.3.4. SOBRE EL INCREMENTO DE LA PENA EN LA TIPIFICACIÓN DE DELITOS

5.3.4.1. Sobre la función de la pena el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 010-200AI/TC, ha precisado:

"XII. Proporcionalidad de las penas

(...)

198. *El Tribunal Constitucional considera que, en materia de determinación legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no debe partir necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del legislador junto los bienes penalmente protegidos y loscomportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las conductas que pretende evitar, así como las penas con las que intenta conseguirlo. En efecto, en tales casos el legislador goza, dentro de los límites de la Constitución, de un amplio margen de libertad para determinar las penas, atendiendo no sólo al fin esencial y directo de protección que corresponde a la norma, sino también a otrosfines o funciones legítimas, como los señalados en el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución.*

199. *Corresponde al ámbito del legislador, al momento de determinar las penas, evaluar factores tales como la gravedad del comportamiento o la percepción social relativa a la adecuaciónentre delito y pena. Mientras que a dicho órgano le corresponde evaluar los elementos y circunstancias antes señaladas y de conformidad con ellas, establecer, entre otros supuestos, las penas aplicables para determinados delitos; al Tribunal Constitucional, en cambio, le corresponde indagar si los bienes o intereses que se tratan de proteger son de naturaleza constitucional y por tanto, son socialmente relevantes; asimismo, evaluar si la medida es idónea y necesaria para alcanzar los fines de protección que se persiguen, por no existir otras penas menos aflictivas de la libertad y, finalmente, juzgar si existe un desequilibrio manifiesto, esto es, excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de lanorma".*

5.3.4.2. Asimismo, el Tribunal Constitucional sobre el *ius puniendi* del Estado ha precisado que para el caso del Derecho Penal se rige por principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad[14]:

"a. Principio de legalidad (nullum crimen, nullum poena, sine lege),

[14] Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01873-2009-PA/TC

conforme al cual la ley debe preceder a la conducta sancionable, determinando el contenido de la sanción. Corresponde pues a la ley delimitar el ámbito del ilícito sancionable, por expresa prescripción constitucional (artículo 2.24.d.), de modo que no puede ser objeto de regulación reglamentaria, ni mucho menos de precisiones "extranormativas".

b. *Principio de tipicidad, (...) Esta exigencia deriva de dos principios jurídicos específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica. Conforme al primero, las conductas deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, mientras que, en relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, (...).*

c. *Principio de culpabilidad, que establece que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la responsabilidad objetiva; esto es, que solo se puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su consecuencia están previstas legalmente.*

En el caso del derecho penal, es más sencillo apreciar cómo opera este principio, puesto que además de la tipificación realizada en el Código Penal y de indicarse las sanciones que se pueden imponer a título de culpa o dolo, se establecen los parámetros necesarios para que la sanción no resulte arbitraria o desproporcionada (mínimos y máximos).

d. *Principio de proporcionalidad de la sanción, esto es, que la sanción que se imponga, debe corresponderse con la conducta prohibida, de modo que están prohibidas las medidas innecesarias o excesivas. (...)"*

5.3.4.3. Ahora bien, respecto a este punto, en la Exposición de Motivos no se observa que sehaya realizado el Test de Proporcionalidad que fundamente la modificación que agrave las penas del tipo penal regulado en el artículo 279-G del Código Penal, así como el examen de idoneidad y necesidad, por el cual se determine que no existe ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y sea más benigno que con el derecho afectado[15].

5.3.5. DE LA INCLUSIÓN DE UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE

5.3.5.1. Como se ha indicado previamente, el Proyecto de Ley plantea la incorporación de unacircunstancia agravante al tipo penal tipificado en el artículo 279-G, con el siguiente texto:

"La pena privativa de libertar será no menor de ocho ni mayor de **catorce** años cuando se presta, alquila o facilita las armas o bienes a los que se

[15] Fundamento 109 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0050-2004-AI/TC

hace referencia en el primer párrafo a menores de edad".

5.3.5.2. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el expediente N° 0006-2014-PI/TC, se pronunció:

"32. Ahora bien, merece precisarse que el Derecho penal es el sub-sistema normativo a través delcual el Estado regula y ejerce el ius puniendi a favor de la protección de los intereses esenciales de las personas y la sociedad en general (artículos 1 y 44 de la Constitución).

33. En efecto, el Estado utiliza el Derecho penal, de un lado, para instituirlo como un instrumento formal de control social, y de otro lado, para establecer las conductas punibles, fijar los límites máximo o mínimos de la pena, regular el proceso penal, etc. Frente a la afectación de determinados bienes constitucionales.

34. A fin de cumplir con tales propósitos, a juicio de este Tribunal, el Derecho penal debe procurar, fundamentalmente, servir a todos los ciudadanos, evitando que la pena se convierta en un fin en si mismo, y que desconozca el interés por una convivencia armónica, el bienestar general o las garantías mínimas que la Constitución le reconoce a toda persona. En ese sentido, el Derecho penal debe orientar la función preventiva general y especial de la pena con arreglo a los principios de legalidad, igualdad, culpabilidad, lesividad, exclusiva protección a los bienes jurídicos, razonabilidad, entre otros (fundamento 9 de la Sentencia 0012-2006-PI/TC).

35. No obstante, en el marco del Estado constitucional, la actividad punitiva del Estado no es unaactividad exenta de límites, sino que se encuentra sometida a los valores, principios y derechos fundamentales previsto en la propia Constitución.

36. Es decir, el tradicional especio de libertad que tuvo el legislador penal en el Estado legal paradeterminar los delitos y las penas, en el Estado constitucional se ve limitado por la Constitución en tanto norma jurídica suprema, de manera tal que el legislador penal ya no goza de discrecionalidad absoluta en la configuración de las conductas que pueden resultar punibles y de las penas, sino que, bien entendidas las coas, aquel solo goza de discrecionalidad relativa.

37, En efecto, si bien el legislador gozaba de la más absoluta discrecionalidad para establecer qué conductas debían resultar punibles, cuáles debían ser las penas que le correspondían, entre otros aspectos, en el marco del Estado constitucional, el legislador ve disminuida su discrecionalidad debido a la consagración expresa de un conjunto de valores, principios y derechos en la Constitución.
(...)

42. Según este marco de consideraciones, la tipificación de una conducta como delito y la fijaciónde la respectiva pena, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a la privación o restricciónde la libertad personal u otros derechos fundamentales solo será constitucionalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos

constitucionalmente relevantes frente a su lesión o puesta en peligro. Dicho, en otros términos, solo la defensa de un derecho, principio o un interés constitucionalmente relevante podría justificar en sede penal la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental (fundamento 35 de la Sentencia 0019-2005-PI/TC).

43. Finalmente, conviene anotar que el bien jurídico penal constituye un mecanismo de limitación, así como un mecanismo de legitimación de la intervención penal. En el plano de la limitación, el bien jurídico exige que la ley penal solo puede describir conductas merecedoras de pena, ya sea porque lesionan bienes jurídicos o porque los ponen en peligro. En el primer caso, la punibilidad de una conducta depende de un menoscabo o lesión al objeto de protección penal, en tanto que, en el segundo caso, se exige únicamente la probabilidad de un menoscabo o lesión para este, esdecir, se exige solo el peligro o amenaza de lesión al bien jurídico penal. En el plano de la legitimación, el bien jurídico tutelado porta el núcleo de la justificación de una prohibición o mandato de carácter penal".

5.3.5.3. Como lo ha advertido el Tribunal Constitucional, la actividad punitiva se encuentra limitada, pues la política criminal contempla la punibilidad de hechos y situaciones materialmente peligrosas para los intereses vitales de las personas y de la sociedad, por lo que supone la configuración de las estructuras de imputación penal; en otras palabras, la consideración de una circunstancia merecedora de aumento a una pena debe desprenderse de una evaluación previa de los bienes que son protegidos ante la privación de la libertad así como realizar un análisis de proporcionalidad para determinar el quantum de la pena ante su comisión. Aspecto que no han sido abordados en la Exposición de Motivos, careciendo de elementos que legitiman tantoel incremento de la pena del delito que ya se encontraba tipificado en el artículo 279-G del Código Penal, así como la inserción de una nueva circunstancia agravante.

5.3.5.4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo anteriormente expuesto y contando con la opinión de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado, la Dirección de Derechos Fundamentales y SUCAMEC, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 200/2021-GL, que propone la *"Ley que modifica el artículo 279-G del Código Penal para sancionar la fabricación, comercialización, uso o porte de armas"*, debe ser reevaluado.

5.4. MINISTERIO DE DEFENSA

5.4.1. DE LA PROPUESTA NORMATIVA

5.4.1.1. El Proyecto de Ley N° 200/2021-GL, que propone modificar el artículo 279-G del Código Penal para sancionar la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, propone básicamente lo siguiente:

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

Modificar el artículo 279-G del Código Penal, para sancionar la fabricación,

comercialización uso o porte de armas, en los siguientes términos:

"Artículo 279-G.- Fabricación, comercialización, uso o porte de armas

El que, sin estor debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifico, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimida can pena privativa de libertad no menor de seis ni mayar de doce años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.

Será sancionada con la misma peno el que presta, alquilo o facilita, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso poro fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hacen referencia en el primer párrafo.

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años cuando se presta alquila o facilita las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer párrafo a menores de edad.

En cualquier supuesto, si el agente es miembro de las Fuerzas Armados, Policía Nacional del Perú o Instituto Nacional Penitenciario la peno será no menor de diez ni mayar de quince años."

5.4.1.2. LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Del referido proyecto de Ley se sustenta básicamente en los siguientes fundamentos: La tenencia ilegal de armas ha hecho que muchas personas se dediquen a actividades delictivas.

Según el estudio mundial sobre el tráfico de armas {2020) elaborado por la subdivisión de investigación y análisis de tendencias, División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que las pistolas son el arma de fuego más incautada a escala mundial, siendo América la región que reportó el mayor número de armas de fuego incautadas.

Según el Instituto Nacional de Estadística a Informática (INEI) el Perú registró un aumento
del porcentaje de victimización con armas de fuego, a nivel nacional de 9.1% al 10.9% y
en Lima Metropolitana del 13.6% al 15%. Los crímenes se vuelven más letales y ello
impacta en los niveles de percepción de inseguridad que a nivel nacional tienen un registro superior al 85%.

En el Perú según estudios de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) más del 60% de las armas incautadas a la delincuencia podrían tener origen legal.

En el Perú como en América Latina el debate se orienta a enfrentar el aumento de la tasa de tenencia ilegal de armas de fuego a través de hacer más eficaz y severa la pena de los hechos delictivos.

5.4.1.3. DE LAS OPINIONES TÉCNICAS

Mediante documento de la referencia c), la Fuerza Aérea del Perú, emite opinión señalando básicamente lo siguiente:

El proyecto no ha desarrollado la exposición de motivos conforme lo establece el artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Aprobado por Decreto Supremo N2 008- 2006-JUS, debiendo incluir la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta.

La fundamentación debe incluir un análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la iniciativa planteada, así como sobre su coherencia con el resto de normas vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados internacionales ratificados por el Estado.

No se ha desarrollado el análisis del costo beneficio: "alcances, las implicancias y sus consecuencias, identificando a los potenciales beneficiarios y afectados en forma clara y sencilla; ni se ha identificado el análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional, de conformidad al artículo 4 del Decreto Supremo N2 008-2006-JUS.

El proyecto de ley debe ser complementado y/o reformulado, a fin que con ello, se cumpla con lo señalado en el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

5.4.1.4. Mediante documento de la referencia f), el Ejército del Perú remite el documento de la referencia g), mediante el cual emite opinión favorable respecto de la propuesta de ley, señalando básicamente lo siguiente:

- El Perú ha ratificado la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, aprobados en Washington en noviembre de 1997, así como también el protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego sus

piezas componentes y municiones, aprobado en Nueva York, en mayo del 2021 obligándose en virtud de dichos Tratados, entre otros, a prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas componentes y municiones y a decomisar tales bienes en caso éstos hayan sido producto de la fabricación o tráfico ilícitos.

- La propuesta no altera el marco constitucional ni la legislación vigente, propone modificar el Código Penal a efectos de incrementar la pena por el delito de tenencia ilegal de armas, propuesta que no incrementa el gasto del erario nacional.

- El artículo 279-G debe ser modificado en los términos propuestos para contribuir y enfrentar el aumento de la tasa de tenencia ilegal de armas de fuego, haciendo el sistema más eficaz con unas penas más severas de los hechos delictivos.

5.4.1.5. Mediante documento de la referencia i), la Marina de Guerra del Perú emite opinión señalando básicamente lo siguiente:

- El Código Penal no considera en su artículo 279-G, dentro del tipo penal, el agravante del uso de menores de edad para la comisión del delito tipificado; por lo que, para su aplicación la autoridad jurisdiccional debe evaluar los criterios de agravación previstos en el artículo 46-D "Uso de Menores en la Comisión de delito", del Código Penal.

- En virtud a sus competencias y funciones corresponde que se solicite la opinión del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la SUCAMEC y el Poder Judicial.

- Para una mejor comprensión de la propuesta se sugiere el siguiente texto:

> *"La pena privativa de libertad será no menar de ocho ni mayar de catorce años cuando se presta, alquila, facilita las armas a menores de edad; así* ***coma de aquellos bienes a los que se ha referencia en el primer párrafo."***

5.4.1.6. Mediante documento de la referencia j), se remite la opinión de la Dirección General de Recursos Materiales contenida en el documento de la referencia k), en la cual se señala básicamente lo siguiente:

- El proyecto de ley busca proteger el bienestar general de la colectividad, mediante la protección de bienes jurídicos, como la vida, salud y la propiedad de las personas, cumpliendo de esta manera la función preventiva y protectora de la pena, por lo que se considera que la misma es válida en cuanto a su emisión, lo cual es concordante con lo informado por las Instituciones Armadas.

- la exposición de motivos se basa en aspectos generales, conteniendo cifras nacionales sobre el tráfico ilícito de armas, sin detallar el problema público a solucionar, la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta, así, como la constitucionalidad o legalidad de la iniciativa planteada y su coherencia con el actual ordenamiento jurídico nacional e internacional, al cual estamos vinculados. Asimismo, no se visualiza el análisis costo-beneficio y el impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional, por lo que se considera que la referida propuesta debe ser complementada y/o reformulada.

- Sin perjuicio de lo señalado, se sugiere incluir la inclusión del tipo penal respecto de quién importa y exporta dichas armas de fuego, municiones o materiales destinados para su fabricación o modificación, el cual busca crear una consecuencia jurídica del agente que cometiese dicho acto, en armonía con las actividades de comercio Internacional, en los siguientes términos:

  > *"El que, sin estar debidamente autorizado, fabrico, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, **importa**, **exporta**, trafica, usa, porto o tiene en su poder, armas de fu ego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal. (...)"*

- la propuesta se sustenta en que el tráfico ilícito de armas constituye una seria amenaza contra la paz y la seguridad internacional, debido a que, por lo general, tales armas son desviadas hacia agentes no estatales o usuarios no autorizados vinculados a la delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, o hacia Estados que actúan en contravención al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo que para la Seguridad y Defensa Nacional, el tráfico ilícito de armas constituye también una gran amenaza contra la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, la gobernabilidad y al orden democrático del país.

- El tráfico ilícito de armas convencionales es un problema directamente vinculado con el terrorismo y otras formas de violencia Interna, como bandas de narcotraficantes y otras bandas criminales. a prevención y eliminación del tráfico ilícito de armas convencionales, municiones, partes y componentes, requiere de la cooperación de todas las entidades estatales vinculadas al comercio internacional de este tipo de mercancías, las cuales deben de actuar de manera sistémica para ejercer un adecuado control, supervisión y sanción de tales actividades ante el incumplimiento de las normas previstas.

5.4.1.4. SOBRE EL PROYECTO BAJO ANÁLISIS

5.4.1.4.1. El artículo 44 de la Constitución Política del Perú establece que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo Integral y equilibrado de la Nación.

5.4.1.4.2. El Perú ha ratificado la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como también, el Protocolo contra la Fabricación y tráfico Ilícito de armas de fuego, piezas y componentes y municiones, aprobado en Nueva York, en mayo de 2021, vinculados al control, prevención, combate y erradicación del tráfico Ilícito de dichos bienes.

5.4.1.4.3. Asimismo, el Tratado sobre el Comercio de Armas, tiene por objeto, que los Estados Parte regulen el comercio internacional de armas de fuego, municiones, partes y componentes, prevenir y eliminar el tráfico ilícito de este tipo de mercancías y prevenir su desvío, con el fin de contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional, promoviendo la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados, por lo que corresponde a los Estados establecer consecuencias jurídicas ante su incumplimiento.

5.4.1.4.4. Por otro lado, la "Declaración sobre Seguridad en las Américas", suscrita por nuestro país en el año 2003 en la ciudad de México, determinó que la seguridad hemisférica se ve afectada de diferentes formas; por esa razón, la seguridad tiene un carácter multidimensional que comprende al terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre estos delitos, la pobreza extrema, los desastres de origen natural, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, y el acceso y posesión por terroristas de armas de destrucción masiva y sus medios vectores.• En el ámbito nacional.

5.4.1.4.5. Al respecto, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, regula el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Esta regulación comprende la autorización, fiscalización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados; así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones, no obstante, dicha norma no señala consecuencias jurídicas para quien importa o exporta indebidamente dichas armas, municiones y materiales relacionados.

5.4.1.4.6. Por otro lado, la Política 9 del Acuerdo Nacional referida a la Política de Seguridad Nacional establece el compromiso del Estado a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la

salvaguarda de los intereses nacionales. En tal sentido, el Estado es el comprometido a prevenir, sancionar y afrontar cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general, para lo cual tiene, entre otras metas normativas, la de impulsar las políticas multilaterales en la región, con el fin de cohesionar el esfuerzo común contra las amenazas a la seguridad nacional como el narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, etc.

5.4.1.4.7. En el Foro del Acuerdo Nacional, desarrollado en el año 2002, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática, se asumió, a través de la Novena Política denominada Política de Seguridad Nacional, el compromiso de mantener una Política de Seguridad Nacional que garantice la independencia, la soberanía, la Integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales.

5.4.1.4.8. En tal sentido, estando a lo señalado por los órganos competentes del Ministerio de Defensa, se considera que la propuesta de modificación del artículo 279-G del Título XII del Código Penal, Delitos contra la seguridad pública a efectos de aumentar las penas máximas a aplicar resulta viable, sin perjuicio de lo cual, y en concordancia con lo señalado por dichos órganos técnicos se propone incluir las siguientes propuestas de redacción:

> *"la pena privativa de libertad será no menor de ocho ní mayor de catorce años cuando se presta, alquila, facilita las armas o menores de edad; así como de aquellos bienes o los que se hace referencia en el primer párrafo."*
>
> *"El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, **Importa**, **exporta**, trafica, usa, porto o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad na menor de seis ni mayor de doce años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal. (.. .)"*

5.4.1.5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera **que resulta viable el Proyecto de Ley N° 200/2021-GL,** que propone modificar el artículo 279-G del Código Penal para sancionar la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, conforme a las razones expuestas en el análisis precedente; por lo que, se recomienda dar respuesta en ese sentido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

5.5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO

5.5.1

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

ARTÍCULO 1° Modificación de artículo 279° del Código Penal. - Modifícase el artículo 279° del Código Penal, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 279-G.- Fabricación, comercialización, uso o porte de armas

El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.

Será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hacen referencia en el primer párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años cuando se presta, alquila o facilita las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer parrado a menores de edad.

En cualquier supuesto, si el agente es miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o Instituto Nacional Penitenciario la pena será no menor de diez ni mayor de quince años.

El que trafica armas de fuego artesana/es o materiales destinados para su fabricación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.

Para todos los supuestos se impondrá la inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal, y adicionalmente el inciso 8) si es miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa.

El presente proyecto propone la modificación del artículo 279-G del Código Penal, a fin de que se modifique el plazo máximo de la pena, incrementando hasta doce años, en el supuesto base; y, hasta catorce años, cuando se configure el agravante de que los bienes

sean propiedad del Estado:

CÓDIGO PENAL	PROYECTO DE LEY 200/2021-GL
Artículo 279-G.- Fabricación, comercialización, uso o porte de armas: El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercia/iza, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal. (. . .) **La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años** cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.	Artículo 279-G.- Fabricación, comercialización, uso o parte de armas. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercia/iza, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal. (. . .) **La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años** cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.

Asimismo, se plantea incorporar un párrafo para incluir un agravante en el caso de menores de edad, con una pena de ocho a catorce años:

PROYECTO DE LEY 200/2021-GL

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

> Artículo 279-G. Fabricación, comercialización, uso o porte de armas
>
> (...)
>
> **La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años** cuando se presta, alquila o facilita las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer parrado [Sic] a **menores de edad**.
>
> (...)

En la exposición de motivos se sostiene que la tenencia ilegal de armas es uno de los aspectos determinantes para la realización de otras actividades delictivas, relacionadas a la afectación del patrimonio y la integridad física.

Asimismo, se indica que, de acuerdo a las estadísticas de la UNODC, en América se reporta el mayor número de armas de fuego incautadas. De la misma manera, se hace mención a las cifras del INEI que evidencian el aumento del porcentaje de victimización con armas de fuego, entre el año 2018 y 2019, lo cual también impacta en la percepción de inseguridad a nivel nacional, con un registro histórico superior al 85%.

Finalmente, se hace mención a que, conforme a los estudios desarrollados por SUCAMEC, del total de armas incautadas, sólo el 25% de las personas presenta licencia, del cual el 15% reportó el robo o pérdida del arma.

En principio, es preciso mencionar que en la propuesta legislativa no se fundamenta adecuadamente el incremento de la pena máxima establecida; siendo que solo se hace mención a los reportes estadísticos relativos al delito de "Fabricación, comercialización, uso o porte de armas".

Esto es que, si bien el índice de incautaciones de armas de fuego evidencia que se hace uso indebido de las mismas y que ni siquiera presentarían licencia para su posesión, lo cual se condice con el aumento de victimizaciones con armas de fuego y la elevada percepción de inseguridad; en realidad, todo ello justifica únicamente la tipificación del delito, mas no sustenta de manera suficiente la necesidad de incrementar el plazo máximo de la pena.

Así, el planteamiento legislativo para aumentar dos años el máximo de la pena - tanto para el supuesto base, como para el supuesto con agravantes-, debería ampararse en argumentos acerca de la efectividad de sanciones más severas como desincentivo de la criminalidad. Sin embargo, ya ha quedado establecido que el incremento de las penas privativas de libertad no constituye un verdadero desincentivo para la perpetración del delito.

Ahora bien, es de considerarse que el criterio de prevención del delito sí es esencial

para la efectividad de las sanciones penales, cuando menos a nivel legislativo[16]; empero, no debe perderse de vista que la pena, además de su función preventiva[17] y protectora, también es resocializadora[18].

En efecto, una propuesta de solución ante la persistente comisión de delitos, no puede enfocarse únicamente en la prevención como finalidad única de la pena, sino que siempre debe ir de la mano con las tres funciones que cumple la misma y, por ende, es menester evaluar que, en cuanto a la función resocializadora de la pena, es en el sistema penitenciario donde se hace efectivo el tratamiento con educación y trabajo.

De modo que, la prevención, la protección y la resocialización no son conceptos aislados que puedan ser empleados de manera antojadiza para la adopción de medidas más o menos severas, sino que las tres funciones de la pena se conciben como una sola finalidad en su aplicación y, consecuentemente, debe examinarse cada procedimiento y sistema en el que tenga incidencia.

A propósito de ello, resulta importante destacar el desarrollo jurisprudencial del artículo IX del
Título Preliminar del Código Penal[19] Ergo, la autoridad jurisdiccional, en aplicación irrestricta del código sustantivo, ha establecido que:

R.N. Nº 1012-2003-Tacna
"Por imperio del artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, la pena tiene como función la prevención, protección y resocialización del condenado, por lo que con sanciones severas no se logra tal finalidad".

Expdte. Nº 296-2004-Lambayeque:
"La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora como lo prevé el artículo noveno del título preliminar del Código Penal, teniendo en cuenta que la

---

[16] "Se sostiene que el criterio unificador se concreta en la afirmación de que cada concepción tiene influencia diversa según el momento en que se la considere. De modo que el criterio preventivo general es el que más gravita a nivel legislativo, es decir cuando se sanciona la norma que prevé sanción para todo aquel que realice determinado comportamiento".
(Congreso de la República. "Teorías de la pena. Investigación". Recuperado de https://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/extorsion/Teorias pena investigacion.pdf)

[17] "111. Justificación de la pena en atención a sus fines
111.1. Prevención especial
La resocialización no deja de ser una hipótesis cuyo fracaso se comprueba con la reincidencia y cuyo eventual éxito no puede imputarse con seguridad a la pena sino a la eficacia del sistema de persecución penal. Así lo demuestra la frecuente comisión de delitos a pesar de que se castigan con penas severas, como el ase si nato, el robo agravado o el secuestro, y que la determinación de cuánta resocialización necesitaría el sujeto -de lo que depende tanto la duración de la pena como el tipo de pena que se impondrá- se sustente solo en conjeturas o posibilidades de reincidencia futura". (Méndez, M., & Fabio, I. (2013). "la pena: función y presupuestos". Derecho PUCP (71). Recuperado de https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/67375)

[18] CÓDIGO PENAL
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo IX.- Fines de la Pena y Medidas de Seguridad La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora (...) [Énfasis añadido]

[19] Diálogo con la jurisprudencia. {2007). En G. Quispe Chávez, L. Chipa Ávila, R. Ramírez More, M. Rodríguez Jiménez, & D. L. Perú (Ed.), El Código Penal en su jurisprudencia (Primera ed.). Lima: Gaceta Jurídica

prevención tanto positiva como negativa es de procurar que el penado se reinserte al seno de la sociedad, como el de proteger a la sociedad inutilizando al penado, todo ello en concordancia con el inciso veintidós del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política que establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado por la sociedad".

R.N. Nº 139-2004-Lima
"Para efectos de la imposición de la pena debe tener en cuenta el ánimo de enmienda del procesado frente a los hechos y sus condiciones sociales, coyuntura que permite inferir al juzgador que una pena menos severa y condicional provocará una inminente readaptación social".

Expdte. Nº 4220-2005-PHC/TC
"En el Estado Democrático de Derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, conforme a nuestra Constitución Política (artículo 139, inciso 22), constituye uno de los principios del régimen penitenciario, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados".

Expdte. Nº 2000-232-Cono Norte
"Para efectos de la graduación de la pena, es menester precisar la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena y, en virtud del principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena, ésta prima respecto de las disposiciones contenidas en las leyes especiales (. . .). Se debe ser coherente con la finalidad teleológica, ya que la pena sirve para la reinserción social del acusado que es en definitiva lo que se pretende, ello acorde con lo dispuesto en el art. 139.22 de la Constitución Política del Estado".

Y si ello es así, no se advierte razón alguna para incrementar el plazo máximo de la pena en el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas; más aún si no se tiene evidencia de que la severidad de las penas disminuya el índice de criminalidad; y, por el contrario, las fuentes del derecho nos señalan que la pena no pretende exclusivamente sancionar de manera severa al sentenciado, sino también brindarle la oportunidad de reinsertarse en la sociedad debidamente rehabilitado.

Por otro lado, se tiene la propuesta de inclusión de un agravante, cuando se preste, alquile o facilite a menores de edad, armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación. En relación a ello, pese a que la protección de la niñez y adolescencia siempre puede considerarse como supuestos que ameritan ser incorporados, resulta incierto el escenario en el cual se plantea, toda vez que no se ha desarrollado la configuración de dicho tipo penal.

Siendo así, la situación que se describe en la fórmula legal planteada carece de

fundamento, por cuanto no presenta sustento dogmático, ni de legislación comparada que amerite su tipificación. Así las cosas, no se puede concebir la incorporación de un agravante sin que medie un estudio apropiado del tema; con mayor razón, si se pretende hacer mención a la niñez y adolescencia.

5.5.2. Conclusiones

De las consideraciones expuestas, se advierte que la propuesta legislativa materia de opinión no justifica el incremento del plazo máximo de la pena ni la incorporación de un agravante.

En tal sentido, no solo es necesario abordar los conceptos normativos vigentes respecto a la pena privativa de libertad, sino interpretar sistemática y teleológicamente dichos preceptos, a fin de evitar desvirtuar la finalidad de la aplicación de la pena, que resulta ser la función de nuestro sistema penitenciario.

En definitiva, por todo lo dicho, la Defensoría del Pueblo emite opinión en sentido **desfavorable** a la propuesta contenida en el presente proyecto de ley.

5.6. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

5.6.0.1. El proyecto de ley plantea que las sanciones penales no han cumplido con su objetivo de reducir la criminalidad, incluyendo los casos de tenencia ilícita de armas. Desprende, asimismo, que este fenómeno estaría incrementando la producción de daño social a través del uso de armas de fuego para su comisión (muertes, miedo, mercados ilegales, etc.), por lo que resultaría justificado, en un sentido disuasivo, aumentar la conminación penal del delito de tráfico ilícito de armas e incorporar un nuevo supuesto agravado cuando existe facilitación de armas de fuego a personas menores de edad.

5.6.0.2. Sobre el particular, resulta fundamental tomar como criterio de evaluación legislativa las exigencias de contención punitiva dispuestas por el Tribunal Constitucional. En su Sentencia 0019-2005-PI/TC el supremo Tribunal establece expresamente que uno de los límites que impone la Constitución al legislador consiste en no desvirtuar los fines del poder punitivo que se le confiere para garantizar la plena vigencia de bienes jurídicos, es decir, no desnaturalizar los fines de la pena (Fundamento 36).

5.6.0.3. Con la finalidad de desarrollar dicha premisa de contención, el Tribunal Constitucional ha establecido la necesidad de evaluar el control penal como una herramienta de uso excepcional. En su sentencia 0009-2018-AI/TC exhorta que "el Estado debe recurrir como última ratio al ejercicio del ius puniendi, y debe procurar, dentro de lo razonablemente posible, de acuerdo con el orden público constitucional, hacer uso de todos los mecanismos institucionales de diálogo existentes a fin de evitar y, en todo caso, hacer frente a los conflictos que puedan generarse, teniendo presente

que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado" (Fundamento 15).

5.6.1. SOBRE LA EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS

a) En la exposición de motivos se muestra como un indicador del incremento del uso o tenencia ilegal de armas de fuego a las noticias mostradas en los medios de comunicación. Si bien las noticias permiten conocer los pormenores de casos específicos de criminalidad, es necesario contar con datos estadísticos empíricos más detallados y sistematizados para conocer con mayor certeza la incidencia y/o registro de casos sobre el problema del uso ilegal de armas. Las fuentes mediáticas requieren ser suplidas por datos de victimización, denunciabilidad de sucesos con ínfima cifra negra o registros históricos cuya condición longitudinal permitan interpretar el verdadero nivel de incidencia delictiva en un territorio determinado.

b) Por otro lado, cabe precisar que el informe "Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego" de 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogay el Delito (UNODC) al que se hace referencia para afirmar que las armas de fuego son las más incautadas a nivel mundial, resalta especialmente los límitesde la justicia penal al atender el fenómeno del tráfico ilícito de armas:

"Las respuestas de la justicia penal tienen a restar importancia al tráfico de armasde fuego al centrarse predominantemente en la posesión ilícita, no en el origen ilícito y los delincuentes que participan en el tráfico".

c) UNODC sugiere que cada país mejore sus acciones en el ámbito de la prevención de la dinámica ilícita de armas de fuego, antes de criminalizar o generar un mayor enfoque punitivo en los delitos resultado del tráfico ilícito de armas. Expresamente señala el informe:

"Esta frecuente práctica de limitar la justificación legal de las incautaciones con cargos de posesión ilícita cuando podrían haber sido objeto de tráfico refleja la relativa miopía de muchos sistemas de justicia penal, que se centran en el armade fuego como instrumento para cometer delitos o como prueba, y no ven el valorde abordar su origen y el tráfico ilícitos"[20].

d) Asimismo, en la exposición de motivos se argumenta la necesidad de aumentarlas penas en base a los datos expuestos por Quinteros en su trabajo "Ni más armas ni

[20] Ídem.

más crímenes", publicado en la plataforma virtual de Ojo Público. Cabeseñalar que en este texto se evidencian los defectos que tiene el sistema para otorgar armas de manera legal y para impedir que las mismas terminen facilitando la comisión de delitos violentos. En ese sentido, antes que proponer el aumento de la represión penal, el autor apuesta por la optimización de un registro de identificación:

"Entonces, si bien no serían admisibles prohibiciones o restricciones desproporcionadas al uso y portabilidad de armas de fuego, sí corresponde un control riguroso, lo que exige contar con sistemas de registro confiables, tanto de armas como de municiones, precisamente aquellos sistemas y recursos conlos que cuenta EE.UU. pero el Perú no"[21].

5.6.2. SOBRE EL AUMENTO DE PENA DEL DELITO BASE Y DE SU AGRAVANTE DE PRIMER GRADO

a) Conforme a las apreciaciones anteriores, se puede afirmar que la reducción de la tasa de delitos relacionados al uso y porte de armas requieren priorizar acciones de control y prevención. La alternativa punitivista no supone necesariamente neutralización o reducción del fenómeno. De hecho, ha sido rebatida por su ineficacia, así como por sus limitados efectos en erradicar y reducir las dinámicas criminales alternas. Al respecto, Diez Ripollés señala:

"(...) hay que rechazar aquellas posturas que pretenden dar carta blanca a los poderes públicos en su lucha contra la delincuencia. Así, la tesis conocida como"derecho penal del enemigo", que propugna la creación de un derecho represivoexcepcional, aligerado de garantías y usuario de penas extremadamente duras,para determinadas formas de delincuencia (...) es una defección en toda regla, con armas y bagajes, al campo de la ideología de la seguridad ciudadana[22].

b) Una política criminal punitivista reduce la posibilidad de aplicar acciones integrales con un mayor grado de eficacia para prevenir y disminuir la tasa de delitos. En ese sentido, el aumento de las penas planteadas no está adecuadamente sustentado como medida con capacidad de resolver el problema social. En particular, no se ha desarrollado una explicación causal quevincule la variación o aumento de penas con la disminución de la tenencia ilícitade armas.

---

[21] Quinteros V. (2020). Ni más armas, ni más crímenes. Plataforma Virtual: Ojo Público. Consulta: https://ojo-publico.com/1573/ni-mas-armas-ni-mas-crimenes

[22] Diez Ripollés, J. (2015). La política criminal en la encrucijada. Montevideo: B de F, pp.49-50

5.6.3. SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL SUPUESTO AGRAVADO DE FACILITACIÓN DE ARMAS AMENORES DE EDAD

a) Es necesario tomar en cuenta que el artículo 46-D del código penal regula la agravante cualificada referida al uso de menores en la comisión de delitos. Esteartículo señala en su primer párrafo:

"Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si el sujetoactivo utiliza, bajo cualquier modalidad, a un menor de dieciocho años o a una persona que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia opor sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su conceptode la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso desu acto o para determinarse según esta comprensión para la comisión de undelito, en cuyo caso el juez puede aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado en el tipo penal."

b) Esta agravante cualificada aplicada al delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, regulado en el artículo 279-G del código penal, permitiríaaumentar el máximo legal de doce (12) años de privación de libertad establecidoal supuesto básico, a dieciséis (16) años cuando se involucre a una persona menor de edad. En ese sentido, la propuesta legal en análisis impediría la aplicación de la agravante cualificada, admitiendo una pena máxima de catorce (14) años que resulta menor a la permitida con la normativa actual.

5.6.4. CONCLUSIONES

5.6.4.1. El presente proyecto de ley pretende modificar el artículo 279-G del Código Penal,a fin de incrementar la pena del delito de tenencia ilegal de armas en su supuesto base. Asimismo, plantea incorporar el supuesto delictivo agravante referido al préstamo, alquiler o provisión de armas a menores de edad, conminándolo con una pena no menor de ocho ni mayor de catorce años de privación de libertad. Alrespecto, cabe precisar que la exposición de motivos expone deficiencias argumentativas; se omiten ideas principales de las fuentes bibliográficas que se utiliza; no se justifica la efectividad disuasiva del aumento de penas; y se advierteuna incongruencia penal de atenuación con el supuesto agravante que se pretende incorporar.

5.6.4.2. Después de analizar el Proyecto de Ley N° Proyecto de Ley N° 200/2021-GL, *"Proyecto de Ley que modifica el artículo 279-G del Código Penal, - Fabricación, comercialización, uso o porte de armas"*, esta Dirección General considera que la misma resulta **NO VIABLE**.

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

VI. ANALISIS COSTO BENEFICIO:

No es aplicable a la presente iniciativa el análisis costo beneficio, por cuanto del análisis efectuado resulta no viable.

VII. CONCLUSION:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, después de haber efectuado un exhaustivo análisis de las opiniones de los diferentes organismos e instituciones del sector público y de acuerdo a lo sustentado precedentemente, considera que no es necesaria el aumento de la pena propuesto, por cuanto se contrapone al proceso de resocialización y cuya gradualidad de la pena se encuentra entre las más graves en el ámbito de la criminalidad, asimismo, dicha iniciativa no justifica la efectividad disuasiva del aumento de penas; y se advierte una incongruencia penal de atenuación con el supuesto agravante que se pretende incorporar, en la modificación del artículo 279-G del Código Penal, toda vez que se encuentra regulada de manera taxativa los alcances del delito de Fabricación, Comercialización, uso o porte de armas.

VIII. RECOMENDACIÓN:

Por las razones expuestas, la comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el literal c) del artículo 70 del Reglamento Interno del Congreso de la Republica, recomienda **la NO APROBACION** del Proyecto de Ley 0200/2021-GL y su remisión al archivo.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BALCAZAR ZELADA Jose Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2022 14:53:59-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022 17:51:44-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022 18:26:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 09:58:58-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUERRA GARCIA CAMPOS Hernando FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 10:50:38-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 11:31:45-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 de marzo de 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo, pasó al archivo. —

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 15:28:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 17:19:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALEGRIA GARCIA Luis Arturo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 10:31:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SOTO PALACIOS Wilson FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2022 17:11:16-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 15:48:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2022 16:40:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 16:26:22-0500

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 16:54
Para: syahuana@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: 45d448626b81fcc763fc1e1eed6e2379.pdf

[Solicitante]: syahuana@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: EN LA UNDECIMA SESION ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ACORDO LA ISPENSA DEL TRAMITE DE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA PARA EJECUTAR LO ACORDADO. DICTAMEN RECAÍDO AL PROYECTO DE LEY N° 0200/2021-GL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 279-G DEL CÓDIGO PENAL - FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS.
[Fecha]: 2022-12-28 16:53:57
[IP]: 94.188.207.222

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.